
Alvaro Camacho Guizado

Droga y sociedad en Colombia. El poder y el estigma

Bogotá, CIDSE-CEREC, 1988, 174 páginas

Pese a la enorme importancia que ha adquirido el tráfico de drogas en la última década y a su violento impacto sobre todos y cada uno de los aspectos de la vida social, económica y política del país, es raro encontrar análisis sobre el fenómeno que trasciendan la noticia sensacionalista o la simple dimensión cuantitativa. La obra de Camacho, **Droga y sociedad en Colombia. El poder y el estigma**, es no solo uno de esos escasos ejemplares sino, sobre todo, una invitación a profundizar en el estudio de las múltiples ligazones que se tejen entre los procesos de producción, distribución y consumo de drogas y la organización social y política colombiana.

La estructura del texto constituye, a la vez, su mayor debilidad y su mayor virtud. En efecto, tal y como lo anota el autor mismo, se trata más de una colección de ensayos escritos en diferentes momentos, que de un libro como tal; de una "obra en marcha", más que de una obra acabada. Esto implica, ciertamente, algunas dificultades para su lectura por la dispersión en los temas, por las diferencias notables en el grado de profundidad en el análisis de los mismos, y por las variaciones en el tiempo debido a las cuales los dos últimos capítulos aparecen mucho más actualizados que los cinco primeros. La virtud, no obstante, radica en que por un lado, la multiplica-

dad de temas tratados no deja duda sobre la complejidad del problema. Y, por el otro, en que una segunda y cuidadosa lectura termina por darle al lector la sensación de estar asistiendo a un doble proceso: no sólo se trata de aquel que ha sufrido el mismo tráfico de drogas en su expansión y tránsito de la marihuana a la cocaína, sino también de aquel que experimenta el investigador al acercarse a un mismo tema en diferentes coyunturas, con grados de comprensión cada vez mayores sobre el mismo.

Pero la flexibilidad del texto, en la estructura y en el estilo, no sólo tiene que ver con su forma sino también con

su contenido. Habría que decir que Camacho no busca llegar a demostrar hipótesis concluyentes partiendo de una recopilación exhaustiva de datos acerca del fenómeno. La mayor riqueza del trabajo no radica en la recolección rigurosa de información empírica novedosa, ni en la coherencia de las posiciones asumidas frente a ella. Radica más bien, en la capacidad del autor para sugerir pautas de interpretación del fenómeno a partir de información ya conocida, en su agudeza para señalar las contradicciones surgidas de la interacción entre un proceso de producción-distribución clandestino e ilegal y una sociedad que, a la vez que lo genera, no ahorra esfuerzos para condenarlo.

Los núcleos centrales alrededor de los cuales giran las principales contradicciones señaladas por el autor son tres: las relaciones entre el Estado y el problema de la droga, aquéllas entre éste y el significado de la represión y, finalmente, el conjunto de contradicciones generadas por la dinámica conflicto-complementación entre los traficantes de droga y las clases dominantes.

En cuanto al primer núcleo, Camacho desarrolla varias tesis dirigidas a mostrar la funcionalidad de la droga para la dominación política y social. En efecto, la lucha contra la producción, distribución y consumo de drogas es, para el régimen, una posibilidad real para intentar una legitimación como garante de la seguridad y el bienestar de los dominados. Además, la magnitud atribuida al problema mediante una eficaz manipulación de la información a través de la prensa y de la ciencia misma, justifica el ensanche progresivo y abarcante de la represión. En el otro lado de la moneda, la organización social de quienes controlan la producción y distribución de drogas también busca utilizar al Estado en tanto canal de ascenso y legitimación social y en tanto soporte para asegurar la continuidad del negocio. La complementariedad y el fortalecimiento mutuos son evidentes en este proceso que no está exento, sin embargo, de serias contradicciones.

Si bien el Estado puede verse fortalecido en algunos aspectos (justificación y ensanche de funciones represivas, ampliación burocrática y de las redes clientelistas mediante la financiación

de campañas y el soborno, etc.), no cabe duda que el auge del narcotráfico también contribuye a debilitarlo. El fortalecimiento del Estado en el sentido de aumentar su fuerza es, en últimas, sólo un indicador de su debilidad como generador de consenso. En otras palabras: la ampliación y fortalecimiento de la capacidad represiva del régimen político colombiano no significa que haya superado la crisis de legitimidad que lo caracteriza. Muy al contrario, esta crisis se ve agravada por la corrupción interna que genera el narcotráfico a través de la compra de funcionarios, minando el sentido de la autoridad legítima y respetada. Peor aún: en caso de que la compra de funcionarios no baste para garantizar la seguridad del negocio y de sus agentes, el uso de la fuerza se puede volcar contra el Estado mismo. Así, la cadena que comienza con la simple compra de un aparato estatal (como el judicial) termina con su aniquilación definitiva. Y es allí donde comienzan a proliferar los aparatos de justicia privada, los ejércitos de auto-defensa, los paramilitares. Estos, si bien pueden ser mirados en principio como una forma objetiva de aunar esfuerzos con los aparatos militares del Estado, también minan su legitimidad y terminan por atacarlo vorazmente. No otra cosa es lo que acabamos de presenciar en el episodio de La Rochela.

En suma, el auge en la producción y tráfico de drogas profundiza la crisis del régimen político colombiano, aunque en algunos aspectos parciales fortalezca al Estado. Uno de tales aspectos, núcleo central de la lectura, es el de la represión. En torno a ella se tejen, también, varias contradicciones. Por un lado, tal y como se anotaba anteriormente, el problema de la droga pone en manos del Estado una nueva excusa para ampliar el rango y la eficacia de sus tradicionales prácticas represivas. En este sentido, quien resulta beneficiado es el aparato militar que así accede a un mayor presupuesto, a un mayor número de armas y a un mayor poder para intervenir en el manejo del orden público. Esto sin contar los beneficios de los sobornos. Sin embargo, la corrupción también mina internamente la institución castrense haciéndola blanco de críticas por parte de la sociedad. Y, de todas formas, el ensanche de sus funciones sólo hace evidentes las debilidades de

un régimen que, incapacitado para responder a éste y otros fenómenos sociales, se ve cada vez más obligado a recurrir al expediente de la fuerza.

Pero, además, hay que considerar a los otros beneficiados por la represión. Sin duda, ella tiende a elevar los precios del producto, con lo cual las organizaciones que controlan el tráfico (tanto las mafias norteamericanas como las colombianas) aumentan sus utilidades. Paralelamente, contribuye a eliminar la competencia de los pequeños y medianos intermediarios, con lo cual se estimula la monopolización de la distribución en manos de los grandes "capos". La cartelización es, por lo tanto, en buena parte, resultado de la represión.

El cartel, en cuanto a organización independiente de los canales tradicionales, escapa no sólo al control del Estado sino al control mismo de las bases tradicionales del poder financiero. En este punto aparecen las contradicciones asociadas al tercer núcleo, aquellas que se refieren al proceso de complementación-conflicto entre las mafias y las clases dominantes. Las mafias, en tanto segmentos particulares de la burguesía, se colocan objetivamente del lado de ésta y la refuerzan no sólo por la vía de la inyección de capitales que garantizan los resortes de su dominación, sino por la del afianzamiento de los valores y tradiciones propios de su clase. En efecto, los traficantes buscan asociarse a los sectores dominantes y para ello reproducen las formas más tradicionales de búsqueda de legitimidad: la política, la filantropía, el acceso a la propiedad privada, la educación y el control empresarial. Algunos sectores de la burguesía reaccionan rechazando abiertamente la integración social de las mafias. Quizás por temor al desplazamiento. Seguramente por el temor a no poder controlar todos los canales a través de los cuales las mafias ascienden en su proceso de integración y legitimación social.

Las contradicciones presentes en el seno de la clase dominante se hacen evidentes a medida que el narcotráfico irrumpe dentro de ella y la polariza. Es el caso de los debates suscitados a finales de la década del setenta frente a la opción represión versus legalización de la marihuana; o aquel desarrollado en torno a la convenien-

cia del Tratado de Extradición en los años ochenta. Tales debates reflejaron algo más que una simple diferencia de opiniones frente al problema de la droga: pusieron de presente la existencia de profundas tensiones y divergencias en torno a la conducción de la economía, el Estado y las relaciones con Estados Unidos.

Estos tres núcleos de contradicciones indican, por un lado que el conjunto de problemas asociados a la droga no es de fácil aprehensión y que las posiciones simplistas, a su favor o en su contra, aportan pocas luces en la comprensión de tan complejo fenómeno. Por otro lado, queda claro que lejos de ser una perturbación adicional y aislada, el problema de la droga y sus agentes sociales ha logrado incrustarse en el corazón mismo de la sociedad y el Estado colombianos generando procesos de conflicto que no han sido comprendidos en toda su magnitud hasta ahora.

La invitación de Camacho a profundizar en el análisis es, pues, una tarea urgente para la cual resultaría de suma utilidad retomar algunas de sus sugerencias. Entre ellas está la necesidad de diferenciar los procesos asociados a la marihuana y aquellos relacionados con la cocaína. Sin olvidar la necesaria conexión histórica que los une, Camacho muestra, en uno de sus mejores capítulos titulado "De la baretocracia a la pericocracia" (Capítulo VI), cómo el salto de la marihuana a la cocaína no es el simple cambio de una mercancía por otra, sino que involucra el cambio cualitativo de una estructura organizativa y un proceso político a otros mucho más complejos que se erigen en una amenaza más notable para el orden institucional.

En segundo lugar, es evidente que una correcta aproximación al fenómeno exige una clara diferenciación entre las sucesivas etapas del proceso

(producción, transformación, distribución, consumo), cada una de las cuales involucra diversos actores, se desarrolla en espacios diferentes y posibilita la configuración de conflictos de varios tipos. Precisamente gracias a esta diferenciación y teniendo en cuenta la heterogeneidad social que caracteriza una de tales etapas, la de la producción de la hoja de coca, es que Camacho logra dilucidar uno de los problemas más agitados últimamente: el de la narcoguerrilla (Capítulo VII). Apoyado en otros trabajos realizados por Molano, Jaramillo, Cubides y Mora, Camacho afirma que si bien puede haber existido una relación funcional entre los grupos guerrilleros, los productores de la hoja y los intermediarios de la coca en algunas zonas de colonización, esto no puede llevar a la conclusión de que por ello existen intereses comunes o estrategias compartidas a largo plazo.

Difícilmente puede creerse en una comunidad objetiva de intereses entre grupos que esgrimen un proyecto revolucionario como fin último de su acción y grupos de traficantes a los cuales Camacho ubica como segmentos particulares de la burguesía. Esta ubicación permite uno de los mayores avances en la comprensión del problema. De ella se derivan su posición de clase, el carácter conservador de su ideología y el sentido último de su acción política. Por lo mismo, se aclara el impacto que ha tenido el narcotráfico en el curso de la violencia: las mafias se vinculan a nuevas formas de conflicto en el momento en que comienzan a reciclar su capital en actividades socialmente legítimas y a la vez rentables. El caso de los traficantes de marihuana que, mediante la adquisición de tierras en zonas como el Magdalena Medio, el occidente boyacense y el piedemonte oriental, entraron en conflicto con los colonos, explica los orígenes de una dinámica que hoy se ha tornado dramática: la for-

mación de ejércitos privados dedicados a garantizar la dominación territorial.

Sin duda, "a la guerra entre el gobierno y el narcotráfico (que pasó a un segundo plano después de la caída del tratado de extradición) se ha sumado otra entre éste y las fuerzas organizadas de la oposición sociopolítica" (p. 128). Las masacres colectivas de 1988 confirmaron muchas de las intuiciones previas de Camacho en el sentido de que esta guerra no puede seguir siendo atribuida a problemas de índole económica (cobro de impuestos revolucionarios a narcotraficantes), sino que va mucho más allá. Se trata de la gestación de una alianza entre el narcotráfico, los sectores dominantes más retardatarios y algunos sectores del aparato militar del Estado, en contra de todos los intentos y protagonistas de la apertura democrática.

Ante tal situación, resulta imperioso resaltar que cualquier política de paz que se intente en el país debe pasar por la resolución del problema del tráfico de droga y sus implicaciones para nuestra sociedad. La ausencia de una política de Estado frente a la producción y distribución de cocaína y otras drogas —ausencia que se hace evidente a lo largo de la lectura—, constituye uno de los vacíos más graves para el actual proceso de paz puesto que la guerra y el narcotráfico se ligan hoy a través del vínculo fatal de los paramilitares. La guerrilla, por su parte, debería también fijar claramente su posición frente al narcotráfico si aspira a erigirse ante la opinión pública como interlocutor válido en la negociación política.

Ana María Bejarano Sandoval. Politóloga. Investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.